

El debate sobre la ayuda militar norteamericana

Sólo en los primeros años de la década pasada, el congreso norteamericano había discutido tan intensamente como ahora sobre la ayuda militar a El Salvador. Las discusiones han sido tan serias que el 27 de junio, la Cámara de representantes aprobó congelar y condicionar una buena parte de los fondos asignados a El Salvador para 1991. En octubre, el senado debía ratificar esta medida. La serie de reuniones para negociar la pacificación ha sido un elemento importante en las discusiones norteamericanas, sobre todo al considerar las consecuencias de una modificación en los términos de la ayuda, pero la masacre de los jesuitas y la forma cómo se ha desarrollado la investigación fue el factor determinante para reactualizar el problema de la ayuda militar al ejército salvadoreño.

Para algunos el giro dado por los congresistas estadounidenses en ambas cámaras simplemente obedecería a la pérdida de interés de Estados Unidos en El Salvador. Los cambios transcendentales ocurridos en el mundo socialista y los nuevos focos de tensión mundial, en especial el conflicto del golfo Pérsico habrían relegado el caso de El Salvador. Esta interpretación no es completamente correcta, porque muchos congresistas, pese a las nuevas preocupaciones mundiales, se han mantenido atentos al desarrollo del proceso salvadoreño; aparte que, tal interpretación desconoce, involuntaria o interesadamente, la gravedad del conflicto salvadoreño y la realidad e inmoralidad de la ayuda militar norteamericana que no ha satisfecho, ni siquiera remotamente, los fines para los cuales ha estado siendo dada.

Los congresistas y senadores norteamericanos conocen la gravedad de la situación nacional y las desastrosas consecuencias de la ayuda militar. Ya en julio de 1981, Gerry Studds, junto con otros 85 congresistas, propugnaron por una salida negociada a la guerra civil salvadoreña, firmando un documento en el cual se daban 86 razones poderosas para suspender o al menos restringir las ayudas militares. Esta petición surgió del horror provocado por el terror estatal y paraestatal, el cual, en menos de un año, había cuestionado la participación directa norteamericana en el conflicto salvadoreño. En 1985, el senador Hatfield y los congresistas Leach y Miller denunciaron violaciones de los derechos humanos, cuantitativamente inferiores a las de aquel período, pero igualmente intolerables; a partir de la experiencia y de los hechos cuestionaron que la política norteamericana, y en particular la ayuda militar, pudiesen conseguir los resultados democratizadores que oficialmente decían estar buscando, tal como también fue previsto y denunciado desde el comienzo por Monseñor Romero y el padre Ellacuría, dos de las voces más representativas y autorizadas del país.

El informe observaba con alarma que esa política sólo prolongaba la guerra, la cual, en cinco años, ni siquiera había aproximado un palmo la victoria militar sobre los rebeldes, que entonces obsesionaba a Ronald Reagan; no estaba consiguiendo erradicar la pobreza ni la injusticia social; tampoco detectaba signos de sometimiento de la brutalidad militar a la racionalidad del poder civil.

En 1987, los mismos legisladores firmaron un informe similar, aún más alarmante, en el cual proponían al congreso la retención del cincuenta por ciento de la ayuda, y su posterior concesión únicamente a cambio de muestras palpables de que tanto el gobierno norteamericano como el salvadoreño hacían esfuerzos para lograr una solución negociada al conflicto bélico.

Había, pues, conocimiento y conciencia sobre los errores, la injusticia y la inmoralidad de la política norteamericana para El Salvador. Y sobre todo, había conciencia de que el obstáculo principal para la solución negociada del conflicto radicaba en la prioridad y en el carácter militar asignados a la ayuda norteamericana —tres de cada cuatro dólares proporcionados por Estados Unidos a El Salvador han sido directa e indirectamente destinados para la guerra, según el informe citado. Pese a toda esa experiencia de tragedia y fracasos acumulados en diez años, en los diez meses de debate sobre la ayuda al ejército salvadoreño, quienes han objetado o se han opuesto a recortar o condicionar dicha ayuda militar han reducido el problema a que con ello se estarían enviando unas “señales claras” al FMLN y a que existía el peligro de recrudecimiento de la violencia por parte de las dos extremas. Curiosamente, quienes apoyan este planteamiento atribuyen a la ayuda militar unas finalidades contradictorias con las que la animaron originalmente y, además, corroboran su rotundo fracaso. En primer lugar, la política y la ayuda militar norteamericana han tenido como objetivo primario y último derrotar al FMLN, no buscar su moderación para hacer posible disputar el poder conforme a los esquemas democráticos. Por eso resulta incoherente reclamar a los rebeldes compromisos explícitos y maximalistas a cambio de un porcentaje de unos fondos que no han conseguido debilitarlos militarmente. Aunque esto no obsta para que el FMLN sepa reconocer, valorar y alentar signos concretos que favorezcan la paz.

En cambio, la ayuda militar sí se propuso moderar, profesionalizar y erradicar a los escuadrones del ejército, sin cuyo respaldo y consentimiento nada habría que temer por parte de la ultraderecha política y económica. Pero ahora resulta que la misma ayuda y la posibilidad de recortarla

como posible causa de más terrorismo militar. Los defensores de la ayuda han pasado por alto este absurdo, el cual, además, es inmoral. De esta forma han evitado pedir cuentas a los donantes norteamericanos y a los beneficiarios salvadoreños y la han emprendido contra la violencia de una ultraderecha tan ubicua como invisible.

Todavía hay quienes han insistido, con alguna razón, en que las condiciones de la ayuda militar se deben saber manejar y se deben poner al servicio del cese del fuego y de la solución negociada al conflicto. No obstante, no debe pedirse al congelamiento parcial de la ayuda militar, aisladamente, un poder pacificador que no posee. Si se acepta lógicamente y objetivamente que junto a la derrota militar de los rebeldes, los norteamericanos promovieron y financiaron un proyecto social, ideológico y político que excluía las de izquierda, debe también aceptarse que la ayuda económica tiene que jugar un papel diferente. No sólo a la hora de la reconstrucción, sino que debe saber transformarse y desmontar las estructuras y condiciones creadas para dificultar y complejificar el entendimiento y la reconciliación nacional en aras de objetivos de guerra. Y esto es algo que parece estar alejado de las mentes y del discurso de los que concentran el problema de la ayuda en el estruendo de las armas.

Sin embargo, también la inercia que impone una década de desatinos puede acabar encontrando motivos para la autojustificación. Las elecciones, impuestas y financiadas por los norteamericanos, como legitimación de su ensangrentada ayuda militar y como excusa para su oposición a una salida negociada al conflicto, son ahora contabilizadas como éxitos de su pretendida política de democratización. La disminución cuantitativa, pero no cualitativa, de la violación de los derechos humanos, requisito para asegurar el flujo ininterrumpido de la ayuda bélica y para viabilizar la adecuada implementación de la estrategia de guerra de baja intensidad —ante el fracaso militar de la estrategia de exterminio a la oposición—, se presenta ahora como signo de profesionalización de la Fuerza Armada, de la voluntad de paz del gobierno salvadoreño y del éxito de la política norteamericana. En este sentido, al sistema de justicia

se le han atribuido todo tipo de progresos firmes, aunque lentos, dada la imposibilidad objetiva de que pudiese empeorar.

Se requería, pues, de una formidable sacudida para librar al Congreso y a la conciencia internacional de la pesada modorra moral impuesta por diez años de muerte y de la trampa mortal del proyecto "democratizador", impulsado y financiado por los norteamericanos. Precisamente, los que se han negado a continuar con el propósito y los resultados de la ayuda militar son quienes se han conmovido e indignado con la masacre de los jesuitas la UCA, y se han guiado honestamente por el estudio de las raíces de su brutal ejecución, las estructuras asesinas del ejército. La luz trágica con que la masacre ilumina la década pasada, así como las desconcertantes revelaciones de complicidad institucional en que se ha visto comprometida la misma investigación junto a los investigados, es lo que ha estado a la base de quienes se proponen cambiar la política de guerra impuesta y sostenida por Estados Unidos en El Salvador. Así, por primera vez en toda la década de guerra, el presidente del congreso estadounidense nombró una comisión especial para monitorear e informarse directamente de la investigación y del proceso judicial de la masacre de la UCA.

La relevancia de esta medida en la decisión de la Cámara de representantes para congelar la mitad de la ayuda militar para el ejército salvadoreño ha sido enorme. Esta primera decisión está llamada a prestar mayores servicios a la justicia y a la paz. Por un lado, con ella se superaron los informes falaces sobre el progreso en el respeto de los derechos humanos del Departamento de Estado, mediante los cuales el gobierno de Reagan siempre arrancó al congreso todas las ayudas que quiso para favorecer el triunfo del ejército salvadoreño, aun en los peores momentos del terrorismo estatal.

La justicia volvió a aparecer con los mismos vicios y debilidades que, entre otras causas, motivaron el conflicto; y los militares de todo rango y condición, investigadores, sospechosos o cómplices, del Alto mando o soldado raso, han dado al mundo el más bochornoso espectáculo de complicidad con el crimen, jamás dado por ejército nacional alguno (ver ECA, 1990, 502). No deja de

resultar irónico que toda la dirigencia militar accediera a comparecer ante el juez, arriesgando así el último resquicio de credibilidad, empujada por el segundo informe de la comisión Moakley y movida, una vez más, a guardar las apariencias y pagar los "sacrificios" que siempre ha requerido la continuidad del flujo de la ayuda.

No obstante, si ya antes la política norteamericana conoció y probó sobradamente su inutilidad como instrumento moderador y regenerador de la política y de los militares salvadoreños, la masacre de la UCA ha puesto frente al espejo a la pretendida pureza moral de la ayuda y de los mismos ayudantes norteamericanos. La masacre desbordó el nivel ideológico de la incomprensión y la desconfianza de la oposición a limitar la ayuda militar para el ejército salvadoreño; ya no se trataba únicamente del problema del financiamiento y del adiestramiento militar, sino del planteamiento ético sobre su uso y sobre el aprovechamiento que de ella hacen los militares salvadoreños, quienes



aparecieron ante los congresistas como incompetentes e incorregibles. En los diez meses que lleva investigándose la masacre se ha ido revelando la complicidad y el encubrimiento de las agencias y de los funcionarios norteamericanos con los asesinos de los jesuitas y del pueblo salvadoreño. Algo que en los círculos del Congreso se han resistido hasta ahora a aceptar.

La clave de todas las "torpezas", "errores", e "ingenuidades" con las cuales los norteamericanos han obstaculizado, si no imposibilitado, la investigación y el acceso a la verdad de la masacre, la proporcionó nada menos que el Departamento de Defensa estadounidense. Esta dependencia gubernamental alegó que no podía entregar a la justicia veintiún documentos intrascendentes sobre las reacciones militares ante la masacre porque con ello pondría en peligro la seguridad de Estados Unidos. De esta forma resulta que la seguridad nacional norteamericana está identificada y fundada en la seguridad de los asesinos del ejército salvadoreño.

Esta posición oficial explica por qué los auténticos informes de inteligencia no han dicho lo que contienen sobre el múltiple asesinato; con ello también han insultado a la justicia que proclaman promover. Pero hay más. A esa postura oficial del gobierno de Estados Unidos se debe que las estructuras de terror persistan enquistadas en la Fuerza Armada. El silencio cómplice o complaciente de los mismos norteamericanos ha hecho posible que los militares salvadoreños actúen impunemente y boicoteen la paz en la mesa de negociaciones. De esta forma, no sólo han traicionado a la justicia, sino que también han demostrado cuánto les importa la democracia que también dicen defender. En el fondo, esta es la razón por la

cual ni la justicia ni el poder civil pueden proceder contra los militares.

Por eso, el trabajo encomendado por el congreso norteamericano a la comisión Moakley, destinado originalmente a monitorear y evaluar la seriedad de la investigación y la voluntad de justicia de las autoridades salvadoreñas, se ha encontrado con una tarea que debe resolver y terminar en su propia casa. El congreso norteamericano debe proceder a investigar la complicidad de los funcionarios de su gobierno con los asesinos salvadoreños. De momento una cosa está clara, los funcionarios norteamericanos son cómplices de encubrimiento y de obstaculizar la justicia. El informe de Gerry Studts vaticinaba en sus conclusiones que si se proseguía con la ayuda militar se construiría "una jaula cada vez más estrecha para los formuladores de la política norteamericana, que muy pronto puede que se encuentren atrapados por aquellas realidades que tan fervientemente han tratado de negar".

Así, pues, diez meses de investigación de la masacre de la UCA y de debate sobre la ayuda militar han replanteado el viejo problema de su continuidad o suspensión en términos de su inmoralidad, complicidad o encubrimiento activos, en el asesinato de los jesuitas y en la agonía del pueblo salvadoreño. El senado norteamericano tiene ahora en sus manos la oportunidad histórica para abrir un camino para la paz y la justicia en El Salvador, distinto a los callejones tenebrosos, trazados por el guerrerismo de la política de Reagan. Un guerrerismo todavía vigente en la cantidad y en la orientación de la ayuda militar y económica norteamericana.

P. C. A.